

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Repositorio Institucional del ITESO

rei.iteso.mx

Publicaciones ITESO

PI - Revista Análisis Plural

1997-02

Recuperación onerosa y frágil

Análisis Plural

Análisis Plural. (1997). "Recuperación onerosa y frágil ". En Análisis Plural, segundo semestre de 1996. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.

Enlace directo al documento: <http://hdl.handle.net/11117/1044>

Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia:
<http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf>

(El documento empieza en la siguiente página)

I. ANÁLISIS ECONÓMICO

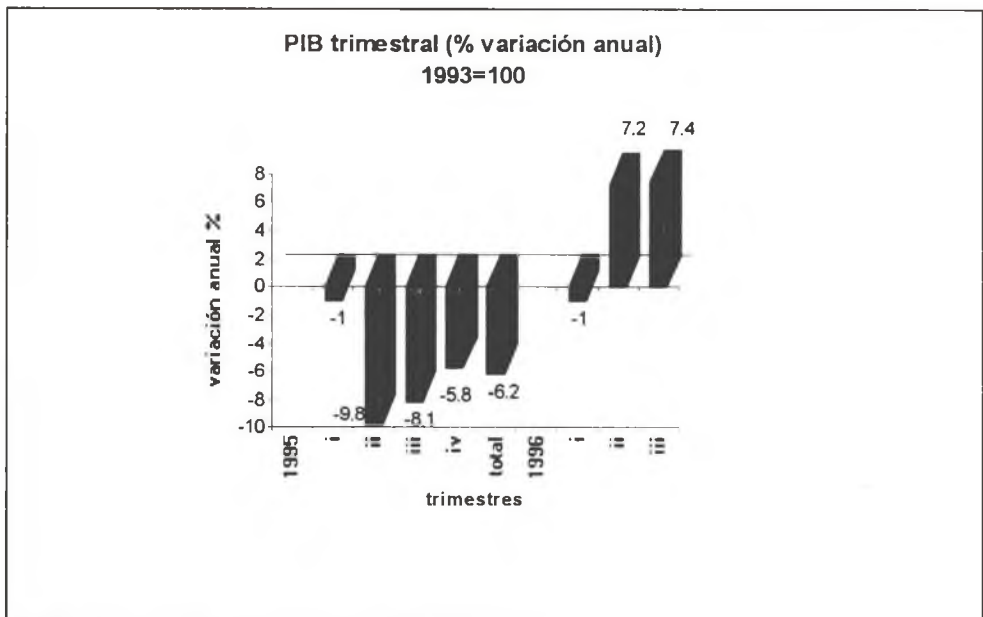
RECUPERACIÓN ONEROSA Y FRÁGIL

- *El año económico de 1996 cierra con una reactivación de alrededor del 4.8 %.*
- *Un aspecto positivo en este desempeño es que además del crecimiento ininterrumpido de las exportaciones, también algunos sectores vinculados al mercado interno se activaron, con lo que los beneficios para el conjunto de la producción fueron relativamente más amplios.*
- *Sin embargo, esta reactivación procede de la muy aguda contracción del -6.2% en 1995 (medida con base en 1993), cuyo costo para la mayoría de la sociedad está resultando tan alto, en términos de una profundización en el deterioro de sus condiciones de vida y de la capacidad misma del sistema productivo con el cierre de empresas, el elevado desempleo y la delicada situación financiera.*
- *Lo más probable es que el crecimiento anunciado del 4% para 1997 refuerce la postura oficial sobre la pertinencia de continuar la misma tónica de política económica que ya nos llevó a la acumulación de rezagos y desequilibrios durante 1989-1994 y que desencadenó la aguda caída de 1995, de la cual costará años recuperarse, como oficialmente se reconoce.*
- *También se afirman las iniciativas de la sociedad para sanear la economía y hacerla productiva para todos. Esta incursión directa de la sociedad en los criterios de política económica, constituye un signo esperanzador para una verdadera democratización, al incorporar al ámbito de la discusión pública la indispensable y muy urgente dimensión económica, pues de por medio están la situación actual de empobrecimiento generalizado y el riesgo de imposibilidad de darnos un proyecto de país propio, lo que significaría continuar acrecentando la exclusión social, es decir, la negación de un presente y un futuro a la gran mayoría.*

1. La recuperación y el bienestar

En el segundo trimestre de 1996 se inició la reactivación de la economía, revirtiéndose así la caída del año precedente, que todavía repercutió en el primer trimestre (-1.0%), para hacer posible un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) estimado en 4.8-5.0 %.

Gráfica 1



Fuente: INEGI.

El liderazgo se localizó en las exportaciones –que aún durante la caída de 1995 se habían mantenido en crecimiento–, si bien su ritmo de expansión disminuyó respecto a dicho año (30.9% y 20.3% en enero-noviembre, respectivamente). Exportadores principales son la industria automotriz, la electrónica y la petrolífera.

A su vez, impulsadas por la caída del consumo en el país, y favorecidas por los menores costos salariales por efecto de la devaluación y los controles salariales, se incorporaron parcialmente a los mercados externos la

industria textil y de la confección, la química y farmacéutica y la de alimentos y bebidas.

En cambio, la producción vinculada con el mercado interno se reactivó en menor proporción –principalmente por medio de la industria de la construcción y de los materiales– que la misma demanda a diversos sectores, entre ellos el de minerales no metálicos.

Asimismo, se vieron favorecidas industrias como la siderúrgica y de productos metálicos, que sustituyeron importaciones porque éstas se encarecieron al devaluarse el peso.

Un factor clave en la mejoría fue el aumento real del 13% de la inversión en enero-septiembre (en particular la pública), realizada principalmente en electricidad, comunicaciones, petróleo y petroquímica.

Pero todos estos buenos resultados fueron insuficientes para extenderse al conjunto de la sociedad. Así, a pesar de que en enero-septiembre el consumo privado se recuperó 3.2% según estimaciones oficiales, éste se concentró en la compra de automóviles, muebles y enseres domésticos, por lo que debe haber abarcado a un grupo relativamente reducido. En cambio, el promedio general de ventas al menudeo se contrajo durante casi todo el año; según cifras del INEGI, apenas en octubre se incrementaron 2% respecto al mismo mes del año anterior. Así, a pesar del citado repunte, el consumo total redujo su participación de 71.5% en 1995 a 70.4% en 1996 (otras estimaciones registran una participación de sólo 62.5% y 58%, respectivamente),¹ por efecto del deterioro en los ingresos de la mayoría de la población.²

Si bien al 15 de octubre los trabajadores permanentes inscritos en el IMSS –el indicador básico del empleo– sumaban 2.9 millones –lo que significó recuperar las plazas perdidas en 1995 y crear 125 000 más respecto al nivel de diciembre de 1994–,³ el número de personas que reciben por su trabajo menos de dos salarios mínimos se ha incrementado hasta casi la mitad de la fuerza

¹ Grupo de Economistas Asociados, GEA Económico, 15 de septiembre de 1996, p. 5.

² La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que las ventas en esos establecimientos cayeron ininterrumpidamente durante el año hasta septiembre; en esos meses las primeras se redujeron 3.8% y las segundas 8.5%, respecto al mismo mes de 1995.

³ Presidencia de la República. *Alianza para el Crecimiento*, firmada el 26 de octubre por los sectores obrero, campesino y empresarial, el gobierno federal y el Banco de México.

de trabajo. Y la remuneración media manufacturera (sueldos y salarios más prestaciones) se redujo durante el año en alrededor del 6%.

Por otra parte, la recuperación se produjo en un entorno de inflación relativamente controlada, ya que en noviembre el incremento acumulado de los precios llegó al 27.7%, aunque superior a la meta del 26.2% para el año.

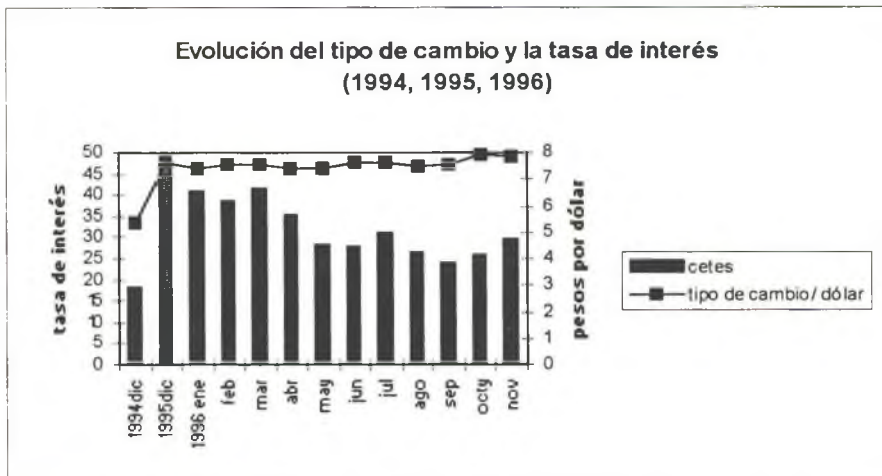
2. La fragilidad de las soluciones

El relativo éxito de las medidas económicas durante el presente sexenio se basa en la misma fórmula –con sus variantes– aplicada desde hace 14 años atrás: después de una descompensación extrema en el sector externo de la economía, es decir, un excesivo endeudamiento o una salida masiva de capitales (1994), se aplica una fuerte dosis de parálisis a la actividad económica para detener la inflación (en diciembre de 1995 llegó al 52%), haciendo que ésta se contraiga mediante la reducción del gasto público, y políticas monetaria, crediticia y de salarios restrictivas. Aderezado todo esto con el imprescindible préstamo externo de miles de millones de dólares (50 en 1995) sin los cuales el peso no se estabilizaría en su relación con el dólar, por la imposibilidad de pagar las deudas con el exterior y de detener la mayor salida de capitales.

Con el préstamo y las elevadas tasas de interés se asegura la estabilidad del peso, lo que junto con la contracción de la producción (1995), permite reducir las presiones inflacionarias y posteriormente darle respiro a la economía para que vuelva a crecer (1996), hasta que se vuelva a desbalancear el sector externo por la salida de capitales y entonces se repetirá el ciclo.

Ya en octubre el peso, cuya cotización había promediado alrededor de 7.50 durante los meses anteriores, se devaluó 5% al pasar de 7.54 a 7.92 pesos por dólar, porque los rendimientos en las inversiones en el corto plazo se habían reducido y empezaban a salir capitales. Inmediatamente se elevaron las tasas de interés.

Gráfica 2



Fuente: Banco de México.

Y a pesar de ser el tipo de cambio el factor clave, el gobierno de México se comprometió a mantener total libertad cambiaria, con lo que se acentúan la fragilidad del peso (ante presiones económicas y políticas internas, o alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, que atraen capitales) y las medidas restrictivas sobre el resto de la economía.

3. La factura de la recuperación

No obstante la recuperación del empleo en los niveles previos a la crisis de diciembre de 1994 (desempleo de sólo el 4.8% en noviembre), el déficit en la creación de empleos era ya muy grande desde el sexenio pasado (contra la meta de un millón de nuevos empleos anuales, el máximo logro fue de alrededor de 600 000 puestos), y al mismo se suman los jóvenes que desde 1995 habrían de incorporarse al mercado de trabajo. Un periodo de crisis no es el más propicio para la creación de empleos, pero el rigor de las medidas restrictivas provocó sin duda una fractura seria.

Por su parte, los sueldos y salarios continuaron deteriorándose como resultado de los controles que se les aplicaron como instrumento de la política antinflacionaria.

Así, los aumentos a los salarios mínimos, del 10% en diciembre de 1995 y el 10% en abril de 1996, que habrían de compensar la inflación anual del 20% prevista originalmente, resultaron insuficientes: a noviembre, la inflación anualizada llegaba al 27.7%.

Y los rezagos continuarán en 1997. El aumento del 17% a los salarios mínimos, efectivo a partir del 3 de diciembre de 1996, basado en una inflación proyectada del 15% para 1997, ya se vio rebasado por incrementos de precios en bienes y servicios públicos y de consumo básico que generarán aumentos en cascada en los precios de bienes y servicios en general:

a) Precios y tarifas públicos

- Gasolinas y diesel, aumento del 8% el 1o. de diciembre de 1996; aumentos mensuales posteriores del 1.03% y el 1.20%, respectivamente.
- Tarifas eléctricas: industrial de alta y media tensión, aumento en diciembre del 10% y el 9%, y en abril de 1997, el 5% y el 3%; para riego agrícola el 1.2% mensual.
- Otros productos petrolíferos y petroquímicos, de acuerdo con los precios internacionales.

b) Bienes de consumo básico

En noviembre de 1996, la canasta básica para una familia de cinco personas costaba 1 732.51 pesos, lo que requería 2.5 salarios mínimos para poder comprarla (670 pesos = 1 salario mínimo).

En estos costos destacan los aumentos de precios ocurridos en septiembre y octubre: 1 litro de aceite de cártamo, 17.8%; 1 kg. de huevo, 11.7%; de carne de cerdo, 13.4%; de pollo, 8.3%; pan de caja, 13.1%, y galletas saladas, 7.1%.

A partir del 30 de diciembre de 1996, el costo de la canasta básica se incrementará nuevamente: el litro de leche pasteurizada aumentó de 3.60 a 4.00 pesos, y 30 centavos el kilo de tortilla, de 1.40 a 1.70 pesos.

Como motivo de los incrementos se explica la necesidad de apoyar esas actividades industriales para que sobrevivan. Además, se destacan los subsidios que se dan a la tortilla, que sin ellos costaría de 2.50 a 3 pesos, y los

apoyos a la población necesitada –distribución gratuita diaria de un kilo de tortilla a 2.4 millones de familias y de leche a 4.5 millones de niños.⁴

Lo cierto es que si alrededor de la mitad de los que trabajan en la economía formal reciben menos de dos salarios mínimos y en noviembre se necesitaban 2.5 de estos salarios para comprar la canasta básica, los recientes aumentos de precios los alejan todavía más de poder comprar lo básico.

4. Las dificultades financieras no saneadas

Numerosos y onerosos son los programas que se han instrumentado para resolver los problemas de imposibilidad de cubrir la deuda que tienen los distintos sectores en el sistema financiero, desde los bancos mismos hasta las personas en lo individual y los gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal).

Siete son los programas y su costo estimado es cercano al 10-12% del PIB, aunque oficialmente se ubica en 8.5% del PIB; aun si se toma este segundo cálculo, equivalente a 192 500 millones de pesos, supera las previsiones de mediados de año de 32 500 millones de pesos (según la estimación no oficial, el costo es entre 207 000 y 270 000 millones).

Así, se utilizaron entre el 8% y el 12% de los recursos públicos –es decir, los recaudados de la sociedad–, para atender la emergencia de aquella parte de la sociedad que, aunque relativamente amplia, apenas si representa un pequeño núcleo dentro del conjunto, y es la que alcanza a tener acceso al crédito, trátase de empresas o personas. Aquí cabría preguntarse si incluso jurídicamente es correcto que se disponga de los recursos públicos sin mediar el consenso social en decisiones tan trascendentes.

Pero además, ni la diversificación de programas y los recursos que se le han destinado logran dar con la solución al problema. Y es que su diseño tiene por objeto sostener la estructura bancaria favoreciendo que ésta pueda sanearse y capitalizarse, mientras que empresas y personas deudoras deben absorber unilateralmente el drástico encarecimiento de sus deudas con la crisis de 1994.

Más ampliamente, en el entorno creado por la política económica de 1990 a 1994, de parcial avance económico y excesivas expectativas de bo-

⁴ *El Financiero*. “Fin al control de precios”, 27 de diciembre, p. 1, y *La Jornada*. “El lunes, liberación del precio de la leche y alza en la tortilla: Secofi”, 27 de diciembre, p. 23.

nanza, las facilidades del crédito en los últimos años hacían casi obligado endeudarse, especialmente después de la escasez de crédito. Cuando los costos del crédito se dispararon, sucedió lo mismo que a México como país con su deuda externa en 1982: la cuenta se endosa a la parte débil, aunque no sea sólo su responsabilidad. Por eso se capitalizan los intereses no pagados por los deudores a los bancos, con lo que su cuenta ha crecido desorbitadamente. Y los bancos no absorben ni parte del problema. También por eso los programas de apoyo a los deudores de la banca sólo les aligeran los pagos en el corto plazo, transfiriéndoles el grueso de los costos para el mediano plazo, sin reducirles en realidad sus compromisos pero sí mejorando la posición crediticia de los bancos con los recursos públicos.

Las últimas cifras reportan que el gobierno les compró sus deudas a los 12 bancos que participaron en el programa de rescate Fobaproa en 144 900 millones de pesos,⁵ resultado de que los bancos se autoprestaron y se endeudaron con otras instituciones para privatizarse, lo cual es de su propia responsabilidad y, sin embargo, lejos de aplicárseles reglas de compromiso estrictas, se les dieron las mayores facilidades. Y aun entre estos bancos se perciben diferencias en los apoyos, interpretadas como favoritismos: Banamex y Bancrecer vendieron al gobierno –temporalmente– su cartera en 91 y 92 centavos por peso, contra un promedio de 87 centavos para el conjunto del programa; y mientras la mayoría de ellos sólo se desprendió del 19% de su cartera, Probursa y Mexicano vendieron más del 50%.

En cambio, a las empresas y personas deudoras, a las que se destinan 106 000 millones de pesos según cifras oficiales, se les aplican criterios estrictos para que cumplan sus compromisos, incluso contraviniendo la ley: los intereses no pagados no pueden capitalizarse (se reglamentó específicamente en el gobierno de López Mateos), y los plazos de reestructuración de las deudas se están ampliando a 25-30 años, cuando el límite es a 20. De manera que los programas de apoyo a los deudores de la banca sólo les prolongan la vida de su deuda, aligerándoles relativamente el monto de los pagos en el corto plazo. Pero aún así prevalece para la mayoría la imposibilidad de pagar.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) indicó que alrededor del 90% de los 452 360 millones de pesos que deben la

⁵ Los bancos, por su parte, deben aportar 58 400 millones de pesos como recursos nuevos para asegurar su capitalización.

micro, pequeña y mediana empresas, no se puede pagar. A su vez, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) declaró que de los 120 000 créditos del sector agropecuario, sólo se reestructuraron 5% bajo el Finape, programa de apoyo a productores agrícolas y agroindustriales debido, entre otros factores, a los bajos precios agrícolas, por lo que propuso ampliarlo seis meses más (concluyó en 1996).⁶

De acuerdo con El Barzón, más del 50% de la población con préstamos de bancos se encuentra en cartera vencida (4.1 millones de personas en suspensión de pagos), debido a que la gente no tiene para pagar y a que los programas de apoyo no responden a sus posibilidades. Su propuesta es formar un fideicomiso de apoyo a deudores; por su parte, el PAN propuso descontar el 30% a los créditos vencidos.⁷

Como reflejo de la gravedad de la situación, algunos bancos empiezan a tomar medidas. Bancomer y Banamex han empezado a ofrecer quitas de 70% al adeudo total de personas sin retrasos en sus pagos de créditos hipotecarios y de tarjetas de crédito; Banco Obrero les antecedió con quitas de 50%.⁸

Del 13 al 20 de diciembre de 1996, el total de la cartera vencida, de acuerdo con la calificación del Securities Auction Capital (SAC) aumentó de 48.36% a 48.66%, y 26% califica como riesgo alto y muy alto. Entretanto, la penetración de bancos extranjeros al sistema bancario mexicano se ha facilitado por las dificultades que éste enfrenta. La banca extranjera tiene ahora el 15.4% de este mercado.⁹

A su vez, las irregularidades en la privatización de los bancos, que se conocieron casi accidentalmente al descubrirse que muchos de ellos carecen de personalidad jurídica cuando deudores les interpusieron demandas –Banco del Atlántico, Bancomer, Serfin, Banpaís–, no han recibido la atención oficial necesaria, no obstante la importancia de la banca en el sistema económico.¹⁰

⁶ *El Financiero*. “Insolvencia bancaria, obstáculo para el crecimiento económico en 1997”, lunes 23 de diciembre, p. 12-A, y “Cierran la compra de Fobaproa”, martes 24 de diciembre, p. 1.

⁷ *La Jornada*. “En cartera vencida, 50% de los usuarios de crédito”, sábado 21 de diciembre”, p. 28.

⁸ *La Jornada*. “Quitas de hasta 70% ofrecen bancos a deudores morosos”, viernes 3 de enero de 1997, p. 25.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *El Financiero*. “En stand by, las decisiones jurídicas contra la banca”, domingo 29 de diciembre.

5. El balance de dos años de gobierno

5.1 *El oficial*

De acuerdo con el texto de la Alianza para el Crecimiento, firmado en octubre de 1996, el cual sucede a la Alianza para la Recuperación Económica (ARE) suscrita en 1995 por representantes de las organizaciones cúpula empresariales, obreras y campesinas y el Gobierno Federal, "... el propósito central de los programas económicos fue la estabilización de la economía después de la emergencia económica generada a fines de 1994. Los objetivos fundamentales... se han alcanzado".¹¹

En el mismo sentido versó la alocución del presidente Ernesto Zedillo en reunión con magistrados y empresarios en Monterrey el 30 de noviembre. Calificó los dos primeros años de su gobierno como un periodo de logros en la superación de la emergencia económica y la recuperación de la posibilidad de crecer, crear empleos y mejorar los salarios. Destacó también que se aplicaron programas sociales en atención a demandas y carencias, particularmente a las familias más afectadas por la crisis de 1996.

Indicó, además, que con el apoyo de millones de mexicanos se disipará "... el pesimismo de los muy pocos, irremediablemente protagónicos, que desde la frustración, pero también frecuentemente desde el privilegio y la comodidad, sólo alcanzan a pronosticar desastres, siempre fallidos".¹²

5.2 *La sociedad*

Este apartado se apoya principalmente en las opiniones y datos recogidos por el diario *El Financiero*¹³ entre representantes del sector empresarial, académicos y empresas de consultoría.

a) Los indicadores generales

Los avances del programa económico han significado sacrificios y costos para la población, no equitativamente distribuidos.

¹¹ Presidencia de la República. *Alianza para el Crecimiento*.

¹² *El Financiero*. "Inicia una nueva etapa: Zedillo", domingo 1 de diciembre de 1996, p. 23.

¹³ *El Financiero*. "Dispar, el balance de dos años de gobierno", 1 de diciembre de 1996, pp. 4 - 9.

En los dos últimos años la inversión total disminuyó 10% y el consumo se contrajo 15%, en tanto que se perdieron 500 000 empleos y no se incorporaron 1.2 millones de nuevos trabajadores. Se estima que la plena recuperación de esta caída requerirá no sólo meses sino años, pero para entonces se habrán sumado a los rezagos los nuevos requerimientos de la sociedad mexicana y los avances competitivos del mundo. Para el año 2000 la población económicamente activa llegará a 40 millones, de los cuales una tercera parte serán jóvenes de 18 a 25 años.

Como aspectos positivos se reconocen la estabilización del peso, la reducción de las tasas de interés y la baja del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (excedente de los bienes y servicios por los que se pagó al exterior, incluidos los intereses de la deuda externa, respecto a los exportados por México).

b) Distribución de la riqueza

El tratamiento de la crisis de 1994 acentuó la desigualdad en la distribución del ingreso, ya de por sí históricamente muy dispar. Algunos indicadores: ahora el 10% de la población concentra el 50% de la riqueza nacional, y las familias que en 1995 tenían un patrimonio de 16 400 millones de dólares, lo incrementaron a 25 600 millones (equivalente a 9% del PIB).

c) La industria

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), entre enero de 1995 y mayo de 1996 cerraron 17 000 empresas.

Así, por ejemplo, en la industria de la fundición el número de empresas pasó de 1 000 a 200; en el área metropolitana los talleres mecánicos se redujeron de 500 a 125 y en Iztapalapa las empresas industriales bajaron de 2 000 a 500.

d) El campo

De acuerdo con el Plan Nacional Agropecuario,¹⁴ se incrementará la producción agropecuaria en proporción mayor al crecimiento de la población,

¹⁴ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

distribuida apropiadamente entre alimentos básicos y productos de exportación. El cumplimiento de estos objetivos aún no se inicia.

El efecto de la política restrictiva de los últimos años se suma a los problemas generados por la apertura comercial, los crecientes rezagos de décadas en la transmisión de recursos y apoyos tecnológicos y crediticios, y las condiciones climáticas adversas, ante las cuales los programas de la Alianza para el Campo son insuficientes y muy posiblemente inadecuados. En 1996 los 3 000 millones de pesos destinados a los granos básicos a partes iguales por gobierno y productores, no lograron compensar siquiera la caída de los precios internacionales de esos productos, lo que significará pérdidas de 8 000 millones de pesos para casi 2 millones de productores.

El total del sector se contrajo -2.5% en 1995, y -4.8% en 1996.

En el mismo periodo, las importaciones agropecuarias ascienden a 6 000 millones de dólares, de las cuales el 70 % ha correspondido a granos básicos.

A este costo inmediato se suma el debilitamiento de México en su capacidad de proveer alimentos a la población, el abandono de tierras por la imposibilidad de cultivarlas y la suerte incierta de tantos agricultores y campesinos, muchos de los cuales se suman a las corrientes migratorias a las ciudades y a Estados Unidos.

e) La inversión extranjera

En el bienio ingresaron alrededor de 12 000 millones de dólares directamente a la actividad productiva (inversión extranjera directa), y la inversión en la bolsa de valores alcanzó un nivel de 30 116 millones de dólares en octubre de 1996, luego de la reducción continua que había experimentado en los primeros diez meses de 1995.

México significa un riesgo tan alto que seguramente implica la necesidad de ofrecer altos premios a la inversión en bolsa y amplias facilidades a la inversión extranjera directa.

En escala ascendente de riesgo de 0 a 100, el Economist Intelligence Unit asigna a México alrededor de 70 puntos, apenas menos riesgoso que Rusia (80 puntos) pero mucho más que Colombia (40 puntos).¹⁵

¹⁵ Economist Intelligence Unit. "The Economist Emerging Markets Indicators", 7-13 de diciembre de 1996, p. 28.

Por lo que toca a facilidades para las inversiones productivas, sin duda los bajos costos laborales son un poderoso incentivo para procesos en los que resulta más barata la mano de obra que las máquinas, como son, por ejemplo, el ensamble y acabados en la electrónica y la confección.

De acuerdo con una comparación elaborada por el banco Morgan Stanley sobre costos laborales en 17 países, en el lapso de 10 años sólo México y la India tuvieron el dudoso privilegio de disminuir este costo, en el primero de 1.59 a 1.51 dólares por hora en 1995.¹⁶

Y hay otros incentivos que representan ahorros sombra (término equivalente al de precios sombra usado en economía cuando los precios no pueden calcularse directamente) porque no están escritos y se manejan con amplia discrecionalidad: la laxitud en el uso de los recursos naturales y en la aplicación de la legislación ambiental, que en países como Estados Unidos les cuesta muy caro a las empresas observarla, y por eso para las que trabajan en industrias contaminantes –como las teñidoras de telas– resulta atractivo mudarse a México.

6. Las perspectivas para 1997

6.1 La política económica

Los logros de 1996 en materia de estabilización y reanudación del crecimiento refuerzan la continuidad de la política en 1997, y constituye una respuesta negativa al diálogo con la sociedad que sugiriera el presidente de la República en junio, y que tan prestamente diversas personas e instituciones aceptaron. No obstante, el freno parcial a la privatización de la petroquímica constituye una aceptación aunque sea también parcial e incluso reticente, de la voz alternativa de la sociedad, preocupada por cuidar sus recursos y procurarles mejores usos (véase el cuadro 1).

Los lineamientos generales de política económica para 1997 proponen los siguientes objetivos¹⁷:

¹⁶ Economist Intelligence Unit, "The Economist," 2-8 noviembre de 1996, p. 77.

¹⁷ Presidencia de la República. *México: Lineamientos Generales de Política Económica para 1997*.

- a) Crecimiento económico del 4%.
- b) Estabilidad macroeconómica caracterizada por: inflación del 15%; finanzas públicas sanas; déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente al 1.2% del PIB, a financiarse con inversión extranjera directa.
- c) Mejorar el nivel de vida de la población aumentando el empleo, la reforma al seguro social y programas de combate a la pobreza.
- d) Aumentar los niveles de eficiencia y productividad, mediante el cambio estructural y la desregulación.

Los objetivos de crecimiento parecen realizables dada la recuperación parcial de 1996 y los incrementos previstos del consumo y la inversión gubernamentales cuyo inicio –a diferencia de 1996 en que se retrasó para controlar la inflación–, parece previsible con el principio del año, con objeto de buscar resultados favorables en el primer semestre que, a su vez, apoyen al PRI en los comicios electorales en julio.

La medida en que se logre controlar la inflación va a depender de diversos factores, concentrados en los efectos al alza de los precios al reactivarse la demanda, y también en la relación cambiaria del peso respecto al dólar, cuyo deterioro puede producirse por desequilibrios en el sector externo de la economía, es decir, una salida de dólares superior al monto de lo que ingresa, sea por bajas en el rendimiento de las inversiones respecto al riesgo de inversión que represente el país, sea por motivos políticos.

Lo que sí es un hecho es que el gobierno de México sigue apoyándose en los recursos del Fondo Monetario Internacional –y cuando se requiere, del gobierno de Estados Unidos– para sustentar su política económica. En diciembre de 1996 las autoridades mexicanas presentaron al Fondo una carta de intención como garantía para créditos futuros y el refinanciamiento de deudas actuales.¹⁸ La carta constituye un compromiso de política económica para 1997-1999, cuyos objetivos principales son alcanzar el crecimiento económico acompañado de políticas fiscales no expansivas, reducir la inflación y disminuir el componente de corto plazo dentro de la deuda externa (renegociándolo a plazos más largos). También se establece el compromiso de mantener la actual política cambiaria de libre flotación del peso.

¹⁸ *El Financiero*. “International Edition, México Makes Growth Commitment to IMF”, 16-22 de diciembre de 1996, p. 21.

Y también es un hecho que, a cambio del aval que seguramente otorgará el Fondo Monetario, México continuará la marcha hacia la mayor privatización, al mayor otorgamiento de facilidades a los capitales externos en términos de libertad de movimiento, determinación de ganancias y uso de los recursos nacionales.

En los lineamientos generales para 1997 se destacan como fuentes de recursos para la inversión, la privatización de los fondos de pensión para el retiro, estimados en 30 000 millones de pesos anuales, y la de los sectores de telecomunicaciones, puertos marítimos, ferrocarriles, petroquímica, gas natural y electricidad (véase el cuadro 2).

Cabe notar que a procesos como el de la privatización se les llama cambio estructural, expresión con la que parece evocarse un gran cambio refundador. Y de hecho lo es porque obedece a un proyecto de incorporación de México a la economía global, mediante todas las aperturas de su propia economía. Por ello puede considerarse que en materia económica el rumbo sigue siendo claro y firme.

El problema reside en comprender si la globalización decidida para México derivaría en el largo plazo en un bienestar generalizado; no necesariamente riqueza, sólo mejor alimentación, educación, vivienda, servicios básicos. Pero en el largo plazo, como reza la famosa frase del conocido economista John Maynard Keynes, todos estaremos muertos.

Y, por otra parte, las autoridades mexicanas parecen afanarse en seguir desarticulando la economía nacional, como si ese fuera el verdadero cometido de la política económica. Lejos están de intentar una inserción inteligente a la globalidad, en la que se lancen jugadas de ajedrez de corto y mediano plazos para beneficio del conjunto del país o, más realistamente, en el que por lo menos tiendan a equilibrarse las pérdidas y las ganancias y quede así abierta la puerta hacia nuestra viabilidad como país –por ahora no se conoce mejor referente, aun si las naciones acaban por desaparecer.

Entre tanto la pobreza se conceptualiza y se atiende como un apartado separado, independiente de la acción económica y sus efectos.

El capítulo de desarrollo social de los lineamientos de política marca como principales acciones: mantener el suministro de leche, tortilla y desayunos escolares a los grupos más necesitados; inicio del Programa de Alimentación, Salud y Educación para 400 000 familias en extrema pobreza; inicio de un Programa de Empleos Temporales en zonas rurales de bajos

ingresos, y los gastos para la privatización de los fondos de pensión del IMSS. Las tres primeras acciones, positivas en sí mismas, serán insuficientes para responder a los deterioros que ha sufrido la sociedad en sus condiciones de vida.

Y, sobre todo, la política económica tiene una naturaleza intrínseca excluyente porque lejos de impulsar la productividad y aprovechamiento creciente de los recursos en general, tiende a paralizarlos al privilegiar las ganancias financieras y las exportaciones, mientras que el resto de la economía, que es la mayor, padece la carga de los costos de la crisis y carece de los apoyos que los dos sectores mencionados reciben.

En este tenor, baste considerar que sólo en 1996 los pagos de intereses de la deuda externa sumaron alrededor de 20 000 millones de dólares (una tercera parte correspondiente a deuda privada). El cumplimiento de este compromiso viene significando que el conjunto del país tiene que privarse de esos recursos —unos aportan mucho más que otros, que podrían utilizarse para invertir y crecer.

6.2 Los criterios de la sociedad

La acción participativa de diversos expertos y agrupaciones sociales ha llegado a los hasta hace poco áridos temas económicos. Restituye así el carácter social que la economía tiene por naturaleza y trasciende el solo diagnóstico técnico y el juicio crítico tan necesarios, para presentar propuestas de acción.

Esta acción propositiva no logra todavía resultados tangibles; pero su presencia se afirma cada vez más y su solidez le hace merecedora de atención por parte del gobierno.

Las soluciones y las alternativas coinciden en el vértice común de referir la economía a su dimensión verdaderamente productiva, y varían en los ángulos de los temas abordados.

Así, va desde la muy puntual petición de la diputada Ifigenia Martínez de elevar la partida destinada al campo dentro del presupuesto de egresos de la federación de 1997, a efecto de que se pudiera emprender una verdadera recuperación del agro, hasta la formulación de políticas integrales y los esfuerzos por esclarecer legalmente las responsabilidades de servidores públicos en el orden económico, y pasa por las propuestas del PRI para

retener el control nacional de la petroquímica y la protesta del PAN por las modificaciones del 13 de diciembre a la ley de inversión extranjera porque se abre la mayor penetración de ésta en la economía nacional y al control del capital al aprobárseles participación del 70-80% (antes 49%).

A manera de ilustración, se presentan dos referencias:

a) Visión 2020, Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)

Este programa de largo plazo fija objetivos y metas para el 2020, orientados a superar los retrasos actuales y responder a las necesidades de una población proyectada en 132 millones para ese año, elevando la competitividad general de la economía: crecimiento anual medio de 7.9% y logro de un PIB per cápita de 15 000 dólares.

El interés... deriva de la preocupación del sector industrial de establecer las bases para que nuestra economía pueda convertir su riqueza potencial en riqueza real y el crecimiento sea sostenido, equilibrado y permanente. Porque nuestro país, con toda la abundancia de recursos de que dispone, no puede seguir en una dinámica de inestabilidad, desequilibrios y crisis recurrentes.

Tenemos que establecer una estrategia que nos permita orientar el desarrollo industrial hacia las metas que nos tracemos. La experiencia exitosa de los países asiáticos, que han desarrollado e implantado planes de industrialización a largo plazo, nos muestra que es posible salir del subdesarrollo y crear una economía competitiva, aun sin contar con recursos, si se diseñan las estrategias adecuadas para desarrollar las ventajas competitivas.¹⁹

Los ejes de la propuesta, elaborada con gran cuidado técnico, son:

- Reconocimiento de la importancia de un ambiente macroeconómico estable pero basado “en el buen desempeño del sector productivo”.²⁰
- Vinculación orgánica de cadenas productivas dentro de la industria y entre ésta y el campo por medio de políticas expresas.
- Apoyo efectivo a la modernización de la pequeña y mediana empresa.

¹⁹ Concamin, Industria, Editorial, noviembre de 1996.

²⁰ *Ibid.* p. 15.

- Prioridad real a la educación, la capacitación y la investigación científica y tecnológica.

b) La mexicana, economía de ficción

El prestigiado economista Leopoldo Solís, en su más reciente libro,²¹ cuya edición de 2 000 ejemplares se agotó extrañamente en una semana, considera que "... la crisis se gestó durante varios años y sus causas centrales se ubican en la naturaleza del modelo y las políticas estabilizadoras seguidas, los cambios en el exterior, y los acontecimientos políticos derivados de la pugna por el poder en México".²²

"... están presentes causas que se fueron gestando a lo largo de años como resultado de una administración que permitió la 'economía de casino', en lugar de propiciar la formación de capital humano y físico".

"... en la medida que se encuentre una explicación congruente con la realidad económica, se podrá avanzar en el diagnóstico de la problemática actual y formular opciones de política. ¿Por qué si hubo represión salarial y ascendió la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera, según el INEGI, los precios continuaron ascendiendo? ¿Por qué si ahora la banca comercial privada es supuestamente más eficiente que cuando estaba en manos del gobierno, resulta que los márgenes de intermediación continúan siendo muy elevados y los bancos están a punto de caer en la insolvencia a causa de la abultada cartera vencida? ¿Por qué las cuotas de uso del moderno sistema de supercarreteras resultan elevadas en relación con las de nuestros principales socios comerciales...? ¿Por qué las tasas de interés no bajaron frente a las cuantiosas entradas de capitales externos? ¿Por qué se tomó primero la decisión de hacer más lento el desliz, y luego cambiar la deuda interna de Cetes a Tesobonos, cuando se sabía que el déficit de la cuenta corriente y en especial el desequilibrio comercial era ya insostenible a finales de 1993? ¿Por qué el ahorro privado nacional es tan reducido?"

Respecto a las soluciones, "... se pueden mencionar las que propusieron los sectores empresariales y académicos, en el sentido de racionalizar la apertura comercial haciéndola selectiva y gradual; de adoptar verdaderas

²¹ Leopoldo Solís. *Crisis económico-financiera 1994-1995*, FCE, 1996.

²² Macroeconomía. *La debacle del '94*, noviembre de 1996, p. 18.

políticas de fomento económico para la industria y la agricultura, y de regular la entrada de capital especulativo. También demandaron la aplicación de una política cambiaria realista que considere el diferencial inflacionario entre México y su principal socio comercial; el abatimiento de las tasas de interés a niveles que sean semejantes con nuestros principales competidores, así como reducción de los márgenes de intermediación financiera a través de un pacto económico-financiero entre banqueros y gobierno, y la utilización de mecanismos para reestructurar las carteras vencidas de los sectores productivos, de acuerdo con la capacidad de pago de los deudores.”

CUADRO 2

La privatización de los ahorros para pensiones

- **Los objetivos**

Aprobada el 12 de diciembre, la nueva Ley del Seguro Social enuncia: "El sistema de seguridad social que requieren hoy los mexicanos y necesitará México en el siglo XXI debe contar con bases sólidas para garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar del individuo... [lo que requiere]... la modernización de la seguridad social en el país, y especialmente con respecto a la reforma del IMSS".

- **Los intereses**

Teniendo como antecedente el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la modernización radica fundamentalmente en la desincorporación de los fondos de ahorro de pensiones de los trabajadores, desde el IMSS como depositario, para transferirlo al manejo privado a Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), que a su vez los invertirán a través de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES).

El monto, estimado en 30 000 millones de pesos anuales, es altamente atractivo para las instituciones financieras, que ya se están preparando para competir por captar tan cuantiosos recursos, máxime con la escasez acuciosa de recursos financieros que prevalece.

Se pondera que el flujo de estos recursos al sistema financiero, convertidos ya en recursos totalmente privados al asignársele cuentas individuales a los trabajadores, aportará a la economía el ahorro interno que le permitirá reducir su dependencia del capital externo para poder crecer. Expertos del caso chileno, primero en América Latina, aclaran que el crecimiento de la inversión no fue producto del manejo de estas cuentas, sino de estímulos fiscales explícitos a las empresas (impuesto cero).

La motivación aparece muy claramente vinculada al florecimiento de las inversiones bursátiles de corto plazo, articuladas en gran medida al financiamiento de deudas públicas y privadas, más que a inversiones productivas —en Chile, líder del esquema, apenas ahora 11% se destina a ellas: de ahí su alto riesgo y los elevados rendimientos que se ofrecen, con lo que son altamente especulativas. Es el caso de los mercados emergentes de países en desarrollo, pero su origen está en los avanzados: gran parte de los préstamos que México recibe de Estados Unidos son recursos de los fondos de pensión de ese país; de ahí el imperativo para el gobierno norteamericano de asegurar que México pague, y de volver a prestarle para tal efecto o así decho gobierno evita enfrentar jurídicamente las pérdidas de los derechohabientes de Estados Unidos, favorece los negocios del sistema financiero de su país y aprovecha el esquema para exigir a México mayores facilidades para el desarrollo de sus negocios en todo el ámbito de la economía.

- **Los riesgos en México**

— Los sistemas de salud y asistencia social tenderán a desaparecer al debilitarse los ingresos del IMSS por concepto de cuotas. No obstante las criticables deficiencias en los servicios, los costos de la medicina privada son inalcanzables para la mayoría; se producirá un vacío cuyo daño ya se resiente actualmente porque las crisis han menguado su capacidad de servicio al reducir sus ingresos de las cuotas de los derechohabientes al tiempo que los incrementos de precios disminuyen la disponibilidad de materiales y equipos médicos.

- La administración de los recursos conlleva implícitos numerosos riesgos: aunque la colocación de los fondos tenga altos rendimientos, éstos derivarán precisamente de altos riesgos, por lo que pueden producirse pérdidas multimillonarias que dañarán el poco patrimonio del que ya no puede trabajar; aparte del alto contenido especulativo por su destino, entran a manejarse dentro del sistema financiero mexicano en un momento de virtual quiebra, lo que le da una muy baja confiabilidad.
- El sistema requiere información veraz y amplia así como un nivel de comprensión del mercado financiero por parte de los derechohabientes, que son los que tomarán las decisiones de inversión; ambos requisitos son difíciles y requieren de mucho trabajo de preparación. Simplemente, ya se presentó la falla de que se produjeron más tarjetas de derechohabientes que los derechohabientes existentes.

- Los beneficiarios

Los bancos se están aliando entre sí y principalmente con extranjeros, para captar no el mayor número de cuentas (máximo 1.8 millones por institución), sino aquellas que pertenecen a los ingresos más altos: sólo 2.4 millones de empleados perciben más de 5 salarios mínimos, mientras que más de 50% de los empleados apenas alcanza 2 salarios mínimos.

El programa se pospuso para julio de 1997 porque hasta entonces el gobierno podrá apoyar con recursos públicos (equivalentes a 0.2% del PIB).

Podríamos hacernos algunas preguntas: ¿Y si los trabajadores simplemente dijeran que prefieren ahorrar por su cuenta porque no le entienden al sistema? ¿Y si nos diéramos cuenta de que en Europa y Asia obtienen *ahorro voluntario* de la gente para inversiones en la producción, sin afectar sus ahorros para seguridad social y pensiones de retiro? ¿Y si pensáramos quiénes van a ser los mayores beneficiarios?

Fuentes: Grupo editorial expansión; varios números; *El Financiero*, varios números, *La Jornada*, varios números.

